

EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

UN FINAL NO QUERIDO, PERO ANUNCIADO

ALEJANDRO SAN FRANCISCO

Doctor en Filosofía de Universidad de Oxford.

Académico en Universidad San Sebastián y Pontificia Universidad Católica de Chile.

Expresidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de Chile depusieron al presidente Salvador Allende Gossens, quien había asumido el mando del país tres años antes¹.

El tema del golpe de Estado o de una eventual guerra civil había sido habitual durante 1973, aunque los anuncios en la prensa o en el debate político no lograban anticipar el curso que tomarían los hechos. En cualquier caso, no resultaba en modo alguno curioso o imprevisible que la vía chilena al socialismo concluyera anticipadamente y que eso ocurriera por una vía violenta. De hecho, hacia mediados de agosto de 1973 era evidente que las diversas fórmulas que procuraba el Presidente de la República iban fallando una tras otra, como el llamado gabinete de seguridad nacional o el diálogo con la Democracia Cristiana. Otras no habían logrado resolver la crisis entre los poderes del Estado (tal fue el caso de las elecciones de marzo de 1973 que, pese al triunfo opositor, no definieron la lucha política). Finalmente, las alternativas pendientes no tuvieron lugar, como habría sido el caso de una eventual renuncia del presidente Allende, o bien, el plebiscito comentado, pero nunca llevado a cabo.

Adicionalmente, la política y sociedad estaban profundamente cambiadas en el Chile de mediados de 1973. La correlación de fuerzas se había modificado: en la práctica, el país estaba paralizado y al borde de la guerra civil; había acusaciones cada vez más abiertas contra el gobierno por la violación de la Constitución y las leyes, así como también llamados expresos o tácitos a las Fuerzas Armadas para que intervinieran o ayudaran a resolver la crisis. Por todo ello, y por una serie de acontecimientos que durante agosto contribuyeron

¹ La bibliografía es amplia. Algunas obras generales que se pueden consultar son: Fermeandois (2019); San Francisco *et al.*, (2019); Quiroga (2016); Sepúlveda (2020). Dos obras importantes de quienes participaron en el gobierno de la Unidad Popular son las de Joan Garcés (1990) y Sergio Bitar (2017).

a inclinar la balanza, finalmente llegó el 11 de septiembre como fecha decisiva para el fin del gobierno de Salvador Allende.

En el Bando N°5 la Junta Militar entregó numerosos argumentos sobre la grave situación en la que se encontraba Chile, que constituían una amenaza interna y externa para el país y arriesgaba la subsistencia como Estado independiente. Entre las acusaciones destacaban que: el gobierno había incurrido en grave ilegitimidad; quebró la unidad nacional al fomentar la lucha de clases; se puso fuera de la Constitución y usó los resquicios legales; había quebrado el respeto a los demás poderes del Estado; la economía estaba estancada o en retroceso y con una inflación desbordada; el Presidente condicionaba su acción a los comités de los partidos de la Unidad Popular (UP); y existía en Chile «anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico». A la luz de la doctrina clásica, todo ello muestra antecedentes «suficientes para justificar nuestra intervención para deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir»².

¿Eran válidos aquellos argumentos? ¿Qué otras razones podrían haber influido en la resolución de las Fuerzas Armadas y en la ruptura institucional, así como en la intervención militar del 11 de septiembre? El tema siempre tendrá aspectos políticos dentro del análisis, así como explicaciones contradictorias de parte de los actores fundamentales de entonces. No obstante, ello no excusa el necesario esfuerzo que debe realizarse para intentar comprender los factores que precipitaron la crisis y el término del régimen institucional en Chile. A comienzos de agosto, un observador externo —el sociólogo francés Alain Touraine— afirmó en el diario que llevaba cada día que estuvo en el país, que desde hacía algún tiempo «el vacío de poder es cada vez más absoluto» (Touraine, 2020).

Aquel vacío lo llenarían las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973 de una forma decidida y violenta.

² Junta de Gobierno, Bando N°5, 11 de septiembre, 1973.

La Izquierda y el Imperialismo

Quizá desde mediados de siglo, y cada vez con más fuerza, la izquierda entendió que la lucha política en América Latina tenía un carácter antimperialista. La liberación de los pueblos —o la nueva independencia, como se le llamó— exigía enfrentar a los Estados Unidos de Norteamérica en cada lugar del continente, como afirmó con entera claridad y transparencia Ernesto Che Guevara (1967/2006) en su mensaje a la Tricontinental.

A su vez, los partidos de izquierda solían adoptar en aquellos años una definición que establecía tres conceptos fundamentales: antimperialista, antioligárquico y antifeudal, precisando claramente cuáles eran los adversarios nacionales e internacionales de la revolución. Con el primer concepto se referían a los Estados Unidos de Norteamérica, con el segundo se oponían a la burguesía local y con el tercero a los latifundistas, todos los cuales serían enfrentados en el proceso de construcción del socialismo.

Por lo anterior, no es extraño que el Programa de la Unidad Popular —publicado en diciembre de 1969— insistiera en que Chile había fracasado en las últimas décadas, por ser «un país capitalista, dependiente del imperialismo» que, ante el desarrollo capitalista mundial, la burguesía monopolista del país se entregaba progresivamente al imperialismo, el cual explotaba a las economías atrasadas de múltiples formas. Las grandes compañías imperialistas habían arrancado grandes riquezas de Chile y el gobierno de Frei Montalva había sido «un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero». Por todo ello:

La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile³.

Por ello, no es extraño que durante toda la administración de la izquierda chilena haya existido un énfasis especial para destacar la influencia extranjera en Chile, específicamente de los Estados Unidos, liderados entonces por el presidente Richard Nixon, quien contaba

³ Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, 1969.

Revista Políticas Públicas, Número Especial, 2023: 93-111

DOI 10.35588/pp.v0iEspecial.6392

Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile

con Henry Kissinger como uno de sus principales asesores. Desde un comienzo, Allende y sus partidos observaron que se estaba desarrollando un proceso que intentaba impedir la consolidación del socialismo en Chile, liderado por organismos privados internacionales y por la propia Casa Blanca (Verdugo, 2013). En esta línea, pensaban los partidarios de la revolución, los norteamericanos buscaban el fracaso de la UP y luchaban con recursos materiales y humanos para terminar con la vía chilena al socialismo.

En la misma línea se expresó el presidente Allende, en su discurso final en la mañana del 11 de septiembre de 1973. En esta ocasión, denunció claramente y, a la vez, fijó su visión de las causas del golpe militar: «el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición: la que les señaló Schneider»⁴. Esta interpretación, en buena medida, sería adoptada por diversos sectores de la izquierda chilena de entonces que observarían en la intervención foránea, y específicamente norteamericana, un factor decisivo en el golpe de Estado (Altamirano, 1977).

La afirmación peca de reduccionismo y tiene más de profecía autocumplida que de una clara comprensión de la realidad, mucho más compleja y cuyas raíces estaban principalmente en Chile, tanto en el plano militar como en los sectores civiles que se opusieron a la UP, la cual, como fue claro en aquellos años, tuvo sus propios problemas a la hora de gobernar el país.

Los Problemas de la Unidad Popular

El gobierno de la UP tenía problemas de fondo para llevar a cabo la vía chilena al socialismo, así como tenía contradicciones ideológicas y prácticas para renunciar a dicho proyecto histórico.

El problema de fondo era ser un gobierno de doble minoría. En primer lugar, el senador Salvador Allende había llegado en forma constitucional al gobierno, pero después de haber obtenido sólo el 36,2% de los votos en las elecciones del 4 de septiembre⁵. En segundo lugar, la UP fue minoritaria en el Senado y en la Cámara de Diputados durante todo

⁴ Discurso Final del Presidente Salvador Allende.

⁵ La relevancia de este ha sido destacada por Arturo Valenzuela (2013), especialmente la sección «La Elección de 1970: El Problema de un Presidente Minoritario» (pp. 78-91).

su gobierno. Esto, en la práctica, hacía inviable una vía legal, democrática o institucional hacia el socialismo, más todavía cuando la Democracia Cristiana adoptó una posición definitivamente opositora.

A lo anterior, por una parte, se sumaban algunas dificultades ideológicas, que tenían particular relevancia en la lucha política de los años 60 y comienzos de los 70, y cobraban particular interés a la hora de las dificultades y de posible búsqueda de acuerdos. Las leyes inexorables de la historia y la victoria asegurada de la revolución socialista —como se repitió tantas veces— hacían pensar en un futuro tan determinado como positivo a pesar de las contrariedades ocasionales. Por su parte, la lógica de la lucha de clases y el rechazo a la conciliación propia del marxismo-leninismo hacían inviable una fórmula intermedia dentro del proceso revolucionario. Por lo mismo, llegar a acuerdos con la oposición, aunque fuera con la Democracia Cristiana, en la práctica significaba hacer concesiones a la burguesía y a los enemigos de clase (Garcés, 2013). Así lo representó especialmente el Partido Socialista en diversas ocasiones.

Por otra parte, existían dificultades de orden práctico, en la política real. Una de ellas, que se probaría bastante adversa, fue el sistema de administración del gobierno a través del Comité de la Unidad Popular, el que debía adoptar las decisiones por unanimidad y donde cada partido tenía derecho a veto. Más importante todavía, esta fórmula dejaba al presidente Allende a merced de los partidos políticos, sin capacidad resolutive, cuestión que se tornaría especialmente contraproducente en temas tan significativos como un posible llamado a plebiscito en 1973 o un eventual acuerdo con la Democracia Cristiana. A ello se sumó el fin de la tripolaridad de 1970 —los llamados tres tercios—, que dio paso a la bipolaridad, con el gobierno y la oposición enfrentados como únicas alternativas, con la Democracia Cristiana como aliada del Partido Nacional, por lo cual la oposición era mayoría.

Finalmente, se puede mencionar el rechazo de los partidos de la UP a algunas ideas del presidente Allende que podrían haber contribuido a distender el ambiente o a resolver la crisis: negociación y acuerdo con la Democracia Cristiana; llamamiento a plebiscito; un gabinete de seguridad y defensa nacional, con integración de militares; o, en fin, facultades para que el propio gobernante pudiera conducir el proceso y resolver, todas las cuales

fueron rechazadas por los partidos. El asesor presidencial Joan Garcés comentaba que frente a estas alternativas la Unidad Popular no tenía propuesta alguna que ofrecer al Presidente (Garcés, 2013).

A todo lo anterior, se sumaba un elemento que excedía lo meramente político: la conformación de una amplia y creciente oposición social, que se manifestó primero contra algunas políticas específicas del gobierno, pero que se terminó expresando contra el proyecto mismo de la Unidad Popular, en una clara politización del conflicto a nivel social.

Oposición Social y Lucha contra el Comunismo

Los análisis sobre el gobierno de la UP a veces tienen el riesgo de ser excesivamente politizados y, por lo mismo, a veces olvidan o relegan la lucha social o la importancia de los movimientos que, sin ser propiamente políticos, tuvieron gran relevancia en la definición de la lucha por el poder.

Desde muy temprano, la izquierda denunció la existencia de golpismo en sectores de la oposición, entre los que incluía obviamente a Patria y Libertad y al Partido Nacional, pero de manera creciente también al expresidente Eduardo Frei Montalva y a sectores de la Democracia Cristiana. Algo similar expresó el oficialismo con ocasión de las elecciones de marzo de 1973, en la cual algunos sectores de oposición esperaban obtener dos tercios del Senado, para poder deponer al Presidente de la República. El tema de fondo era que las diferentes organizaciones de oposición estimaban que el gobierno estaba perdiendo legitimidad o que la legalidad chilena estaba siendo sobrepasada, como manifestaron los líderes opositores en agosto de 1972, cuando acusaron al gobierno y sus partidos de tener una sola meta: «establecer en Chile una dictadura totalitaria»⁶.

Efectivamente, después del primer año de la UP en La Moneda, se puede apreciar el desarrollo de un importante movimiento social que luchó contra algunas decisiones del gobierno, pero que se extendió a una disputa frontal contra la construcción del socialismo en

⁶ Declaración conjunta de la oposición, *El Gobierno Conduce al País hacia una Dictadura Totalitaria*, 30 de agosto, 1972. El documento está firmado por Renán Fuentealba (Presidente del Partido de la Democracia Cristiana DC), Sergio Onofre Jarpa (Presidente del Partido Nacional), Luis Bossay (Presidente del Partido Izquierda Radical), Julio Durán (Presidente del Partido Democracia Radical) y Apolonides Parra (Presidente del Partido Democrático Nacional). Véase *Política y Espíritu*, 335, agosto de 1972, pp. 75-6.

Chile. El movimiento comenzó con la marcha de las cacerolas vacías, el 1 de diciembre de 1971, organizado por grupos de mujeres que denunciaban el deterioro de la situación económica en el país y en los hogares, el cual se manifestó dispuesta a luchar contra el gobierno para representar su molestia y exigencia de cambios (Power, 2003; 2008).

Posteriormente, surgieron otros movimientos organizados por la oposición social, como el Paro de Octubre de 1972, que el gobierno calificó como «paro patronal» y, más grave todavía, «paro insurreccional». En la ocasión, el Ejecutivo dictó estado de emergencia y el país vivió momentos dramáticos de enfrentamiento que algunos pensaron podría haber terminado en una guerra civil. Orlando Sáenz, entonces presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), realizó posteriormente dos reflexiones interesantes que conviene tener en cuenta. Primero, se refirió a la movilización social de octubre como fruto de «un comando amplísimo e informal que se había generado en el fragor de la batalla» y que incluía a numerosos sectores: pequeños comerciantes, empleados y supervisores; camioneros, oficiales en retiro; pequeños agricultores, pescadores, profesores y, desde luego, también empresarios. El dirigente agrega que «ese increíble paro nacional acabó con el proyecto político de la Unidad Popular, porque frente a él se levantó una muralla nacional movilizadora y decidida» (Sáenz, 2017, pp. 75-6).

Acusaciones análogas hubo contra el paro de los trabajadores de El Teniente, el que comenzó en abril de 1973, o las protestas contra la Escuela Nacional Unificada (ENU). Más grave todavía fue la situación que se vivió con la declaración del paro gremial amplio, indefinido y final promovido por diferentes organizaciones en agosto de 1973. No es casualidad que, en esta última oportunidad, los gremios hayan pedido la intervención de las Fuerzas Armadas —sin hablar de golpe de Estado— para «una rectificación inmediata en la conducción del país». Asimismo, urgían un pronunciamiento del Congreso Nacional que se sumara a otros de la Corte Suprema y de distintos dirigentes políticos cuales ya se habían manifestado contra la violación de la Constitución y las leyes por parte del gobierno del presidente Allende⁷.

⁷ Véase *El Mercurio* (1 de agosto, 1973), Frente Cívico-Gremial; (8 de agosto, 1973), *Al País*.

El tema de fondo es que las protestas ya no se concentraban exclusivamente en aspectos puntuales de naturaleza gremial, sino que avanzaban hacia una resolución de fondo de carácter político que pasaba por el término de la experiencia de la UP en La Moneda y el inicio de otra fórmula de desarrollo nacional e institucional. Como sostiene un estudio reciente, «junto al resto del bloque contrarrevolucionario —partidos, empresarios y prensa fundamentalmente— la clase media organizada abrió las puertas a la intervención militar» (Casals, 2023, p. 88). Para entonces, los partidos políticos de oposición y sus dirigentes más importantes, con más o menos determinación, trabajaban y avanzaban en la misma dirección.

Llamados al Golpe de Estado

A estas alturas, resulta evidente que el 11 de septiembre no llegó como fruto de la casualidad ni por acción —ni menos iniciativa— exclusiva de las Fuerzas Armadas. Si observamos el acápite anterior, resulta claro que la oposición social y los intentos de detener la vía chilena al socialismo, e incluso de terminar con el gobierno, habían nacido en la sociedad civil y en el mundo político más que en las Fuerzas Armadas (Rojas, 2003).

En buena medida, aquella fue la argumentación de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República durante 1973, quienes acusaron la ruptura de la legalidad y la juridicidad en Chile debido a la forma de actuar del gobierno al margen del Estado de Derecho. Sin entrar en detalles, no cabe duda de que el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 —sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República— marcó un hito decisivo en la crisis institucional del país. En esta ocasión, la mayoría opositora sostuvo que el gobierno había violado la Constitución y las leyes, como una forma habitual de conducta, vulnerando la democracia y el Estado de Derecho, para establecer un Estado totalitario. Todo esto se había manifestado especialmente en dos ámbitos: la separación de los poderes del Estado y los derechos de las personas.

Entre las graves acusaciones de la Cámara al gobierno, los parlamentarios acusaban:

Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente

propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece⁸.

En el acuerdo propiamente tal, la Cámara pedía a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros:

Poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos⁹.

Declaración clara, compleja y que implicaba un quiebre importante entre el gobierno y las propias Fuerzas Armadas.

En su respuesta a la Declaración de la Cámara de Diputados, el presidente Allende sostuvo explícitamente que dicho Acuerdo era un llamado a un golpe de Estado, tras lo cual concluía: «con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil»¹⁰.

El Presidente de la República sabía de lo que hablaba. Para entonces, Salvador Allende era un líder solitario –no en términos populares, pero sí políticos.

⁸ Acuerdo de Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República, 22 de agosto, 1973, considerando N°5.

⁹ Acuerdo de Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República, 22 de agosto, 1973, Acuerdo Segundo.

¹⁰ Salvador Allende, 24 de agosto, 1973, Manifiesto al País.

La Democracia al Matadero

Se ha dicho, en ocasiones, que la democracia chilena fue atacada desde los Estados Unidos o desde Cuba, que las Fuerzas Armadas le pusieron fin el 11 de septiembre de 1973. No cabe duda de que el factor internacional estuvo presente en la lucha política, en el contexto de la Guerra Fría, como ha ilustrado el excelente estudio de Tanya Harmer (2013). También es un hecho que el 11 de septiembre los uniformados tomaron el control del país y derrocaron al presidente Salvador Allende. Siendo todo ello verdad, no logra explicar que una democracia relativamente sólida se haya descompuesto y terminara por colapsar.

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que —durante parte importante de la década de 1960 y, ciertamente, durante los tres años de la UP— la democracia chilena experimentó un proceso de autodestrucción y fue incapaz de superar los vicios, problemas y ataques recibidos desde dentro del sistema político. En esos años, hubo demasiadas líneas rojas que se cruzaron y, advertidas o no, lo cierto es que en la práctica fueron toleradas o promovidas, sin que hubiera capacidad para enfrentar la aceptación de la violencia revolucionaria como medio de acción política para tomar el poder (definido por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1965 y por el Partido Socialista dos años después) y la superación progresiva de la legalidad y el Estado de derecho, a través de tomas de universidades, fábricas y campos, que precedieron a la UP, pero que se radicalizaron con la llegada de Allende a La Moneda. Hubo una polarización creciente e incluso odio en la sociedad chilena. Y los militares se fueron convirtiendo progresivamente en actores políticos relevantes: el Tacnazo de 1969, la integración al gabinete UP-Generales en 1972, el Tanquetazo y el gabinete de seguridad nacional, en junio y agosto de 1973 (San Francisco *et al.*, 2018).

A todo ello, se sumaron posteriormente los problemas propios del gobierno del presidente Salvador Allende, con incapacidad de conducción política, la falta de colaboración por parte de la Unidad Popular y sus partidos, la intransigencia de algunos dirigentes y una oposición cada vez más dura. También se suma el marco internacional de la Guerra Fría, la politización de los militares, la hipermovilización de la sociedad y la polarización creciente en la sociedad chilena.

El resultado es que, a mediados de 1973, ya era bastante claro que un golpe de Estado e incluso una guerra civil no eran solo amenazas, sino que representaban posibilidades reales en un contexto de enfrentamiento en las calles, amenazas cruzadas y un clima amenazante. Esto llevó a Radomiro Tomic —candidato demócratacristiano en 1970 y fino analista de la realidad— a afirmar, en carta al general Carlos Prats, que Chile, como en las tragedias griegas, avanzaba directamente hacia el golpe de Estado, que todos decían no quererlo y hacían cuanto estaba de su parte para provocarlo: «entre todos estamos empujando la democracia chilena al matadero»¹¹.

A esa altura, sin embargo, el problema no era de análisis político, sino de la realidad existente en Chile, en la vida social y en la lucha por el poder.

La Crisis Progresiva de la Democracia Chilena

Mirado con perspectiva histórica, es evidente que las explicaciones simplificadoras tienen el problema de enfatizar un aspecto determinado de la crisis chilena —que puede ser relevante, pero, a la larga, resulta insuficiente. Para una explicación más valiosa y comprensiva, necesariamente debe existir una visión de conjunto que necesariamente es más compleja y plural.

Desde una perspectiva institucional, Chile tenía problemas evidentes, como eran los gobiernos de doble minoría, pues el gobierno del presidente Salvador Allende no fue el único que sufrió esta limitación. A ello se debe sumar un factor que se mostró con claridad tras las elecciones de marzo de 1973: el régimen de gobierno, de carácter presidencial, tenía poca flexibilidad para superar crisis y contradicciones como las que enfrentaba el país en esos momentos. En otras palabras, un régimen parlamentario hubiera sido mucho más adecuado para resolver la crisis y las elecciones parlamentarias habrían precipitado una crisis de gobierno, pero no una de carácter institucional, sin perjuicio de lo cual los problemas eran mucho más graves que la mera organización de los poderes del Estado.

A lo anterior se suma un problema que se manifestó con precisión desde mediados de la década de 1960, en la sólida y admirada democracia chilena. Si bien existía una

¹¹ Carta de Radomiro Tomic a Carlos Prats, 25 de agosto, 1973.

autopercepción favorable que incluso enfatizaba la excepcionalidad chilena en el concierto internacional, la verdad es que los vientos revolucionarios terminaron por afectar a la democracia. En esto confluían dos cuestiones. La primera era que el sistema político desarrollado tenía como contraparte una gran pobreza y subdesarrollo en el ámbito social, lo que empezó a hacer crisis desde mediados del siglo XX, como denunciaron algunos pensadores, que hablaron de Chile como «un caso de desarrollo frustrado» o un país que sufría una «crisis integral» (Ahumada, 1966; Pinto, 1959). De esta manera, la democracia comenzó a ser calificada como burguesa, formal, claramente insuficiente para los desafíos que tenía el país. La segunda situación fue la efervescencia revolucionaria que, en la práctica, no solo exigía cambios drásticos, sino también urgentes y que fueran hechos por las vías legales y democráticas o bien por la violencia y las armas.

En el último año de su mandato, el presidente Eduardo Frei Montalva lamentaba el atractivo que estaba ejerciendo la vía armada y la violencia en el país:

Yo sé que la revolución con sangre, dramática y totalitaria ejerce fascinante atracción sobre algunos. Yo sé que hay quienes no son capaces de concebir su Patria sino como una copia de otras experiencias, porque no saben mirarla, porque no la entienden.

Periódicamente surgen en las sociedades humanas grupos en que se con-funde la generosidad y la ingenuidad, la ilusión y la rebeldía, las frustraciones personales con el deseo de aventura o la demoníaca tentación de destruir¹².

Frei manifestaba esta posición porque lo pensaba, pero también porque durante su administración se había producido la validación de la violencia política, así como se habían desarrollado vías de hecho y nuevas formas de acción que, en la práctica, corrían el cerco de la democracia y tendían a acorralarla ¿Pasada de moda? ¿Burguesa? ¿Meramente formal? Eran preguntas cuyas respuestas positivas desde la izquierda ponían en jaque la tradicional vía institucional de Chile.

¹² Eduardo Frei Montalva, Mensaje ante el Congreso Pleno, 21 de mayo, 1970.

Revista Políticas Públicas, Número Especial, 2023: 93-111

DOI 10.35588/pp.v0iEspecial.6392

Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile

Pero el problema no estaba solamente ahí, sino que también comenzó a hablarse de los riesgos del militarismo, de la intervención de las Fuerzas Armadas en la actividad política y de la destrucción de la democracia —tímida, pacata, débil frente al marxismo— por parte de los militares y de sectores que promovían la intervención militar en política. Este tema —que podría parecer meramente teórico, pero emergió con fuerza con ocasión del Tacnazo— tuvo una manifestación cruenta e inaceptable con el asesinato del general René Schneider en 1970 y pasó a ser un tema de conversación y de análisis político en los últimos meses de la UP (Garay, 2014).

No es casualidad que, a mediados de 1973, haya habido discusiones sobre la guerra civil, el golpe de Estado, el control de armas o el terrorismo en Chile. En el plano político, lo resumió de manera elocuente y con total transparencia el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, en un discurso en el Senado en la sesión del 11 de julio, cuando se discutió el tema del control de armas. En esta oportunidad, el líder falangista denunció el odio y la degradación moral, sostuvo que el gobierno atropellaba el Estatuto de Garantías Democráticas de 1970, así como acusó una pérdida de fe democrática en el país. Además de fijar ciertas condiciones para la existencia de un diálogo «racional y democrático», Aylwin se refirió a las responsabilidades del gobierno y de las Fuerzas Armadas. En tal escenario, cada día más chilenos pensaban «que solo una dictadura castrense puede restablecer en Chile el orden y la autoridad indispensables para salvar nuestro porvenir como nación»¹³.

Por su parte, Aylwin se manifestaría contrario a cualquier dictadura o totalitarismo, reiterando su lealtad al régimen constitucional: «no ignoramos la gravedad del peligro totalitario en que el oficialismo ha colocado a Chile». Repudiaba un eventual quebrantamiento y enfatizó que haría cuanto estuviera de su parte para resolver la crisis chilena por las vías institucionales¹⁴. Si bien en las semanas siguientes hubo diálogos entre el presidente Allende y el propio Aylwin, ellos terminaron sin éxito, profundizando aún más la crisis¹⁵.

¹³ Congreso Nacional, Diario de Sesiones del Senado, Sesión 35ª, 11 de julio, 1973, pp. 1.282-92.

¹⁴ Congreso Nacional, Diario de Sesiones del Senado, Sesión 35ª, 11 de julio, 1973, p. 1.285, acápite «Nuestra lealtad democrática».

¹⁵ Las reuniones entre Allende y Aylwin, en la narración del presidente del PDC, en «Minuta de Patricio Aylwin, Presidente Nacional del Partido Demócrata Cristiano, sobre reunión sostenida con el Presidente de la República Salvador Allende (30 de julio, 1973)» y «Minuta Diálogo Cardenal-Allende. Historia de la entrevista entre

En la práctica, como sabemos, el 11 de septiembre de 1973 el peligro culminó con la ruptura de la democracia y la crisis institucional no tuvo una resolución pacífica o institucional.

Causas Múltiples para una Crisis Integral

Mirado desde una perspectiva a más corto plazo, es decir, concentrándose sólo en el gobierno de la Unidad Popular, hubo diversos temas, problemas y aspectos que contribuyeron a que la crisis política y social culminara con una intervención militar (*véase*, San Francisco, *et al.*, 2019).

Como telón de fondo —tanto del gobierno de la Unidad Popular como de la intervención militar del 11 de septiembre de 1973— podemos situar la extrema polarización y el odio que se expresó durante los mil días de la administración de la «vía chilena al socialismo». En esto, tuvo un papel especial la doctrina y la realidad de la lucha de clases, pero también el anticomunismo existente desde antes de 1970 y acrecentado en los años siguientes. Ciertamente, también pasó a ser relevante el desarrollo de la violencia ya no sólo como justificación de su legitimidad, sino también como realización de las vías de hecho y forma de hacer política, con todo lo que ello entraña para la destrucción de la democracia (Aranzibia, 2001; Morales, 2023). En este plano, la prensa sirvió de amplificador de la odiosidad y la polarización. En las discusiones parlamentarias también hubo mayor belicosidad, lo que también se expresaba en diversos ambientes sociales.

El segundo factor fue el doble proceso que afectó a las Fuerzas Armadas de politización militar y de militarización de la política. En un primer momento, especialmente a partir de la designación del gabinete UP-Generales, con un claro liderazgo del general Carlos Prats, los uniformados pasaron a ser actores políticos relevantes, lo que los llevó a ser juzgados de acuerdo con su cercanía o lejanía con el gobierno, su adhesión a determinadas políticas oficialistas o su prescindencia a través de la mantención de los principios de obediencia y no deliberación militar (Prats, 1985). Posteriormente, en especial durante 1973, el tema pasó

el Presidente Salvador Allende, el Presidente del PDC. Patricio Aylwin y el Cardenal Arzobispo de Santiago, tenido lugar el día 17 de agosto, 1973», ambos en Archivo Patricio Aylwin.

a ser otro: fueron los civiles, dentro o fuera de la actividad política, quienes comenzaron a demandar definiciones más claras respecto de los uniformados, fuera para defender al gobierno —aunque este violara la Constitución y las leyes— o fuera para contradecir al Poder Ejecutivo, aunque esto pudiera pugnar con la mencionada obediencia y no deliberación. A la larga, se fue preparando el camino para que las Fuerzas Armadas resolvieran la crisis, como había ocurrido en 1891 y en 1924-1925.

El tercer elemento fue la crisis institucional o la discordia profunda sobre la vigencia y la interpretación del contenido de la Constitución Política de la República. Desde siempre han existido diferencias sobre determinados aspectos de la institucionalidad y, de hecho, los tres últimos gobernantes —Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende— propusieron reformas profundas a la Constitución. Sin embargo, durante la UP confluyeron dos aspectos. El primero fue que la diferencia era mucho más profunda entre el régimen político vigente y el programa de construcción del socialismo que planteaba la UP. El segundo es que el avance hacia una nueva sociedad fue mucho más rápido en sólo tres años de gobierno, más revolucionario, en un contexto en que el gobierno carecía de mayorías en las dos cámaras y había recibido una camisa de fuerza que no se mostró dispuesto a respetar: el Estatuto de Garantías Democráticas. A la larga, el problema se tornó insoluble por las vías legales y la crisis no hizo sino crecer. Resulta paradigmático, sólo para efectos de comprender el extremo al que habían llegado las posiciones que, entre el 22 y el 24 de agosto, la Cámara de Diputados acusó al gobierno de violar la Constitución y las leyes con el objetivo de obtener el poder total, para destruir la democracia y el estado de derecho; el presidente Allende contestó que nunca en la historia de Chile había existido un gobierno más democrático que el suyo. Adicionalmente, la Cámara señaló una serie de aspectos por los cuales se había violado la institucionalidad, en tanto el gobernante sostuvo que la mayoría opositora quería cambiar de hecho el régimen presidencial vigente por uno de carácter parlamentario. En tal escenario, era prácticamente imposible resolver la crisis ante la profunda diferencia existente sobre los hechos y la interpretación de la situación que vivía el país.

El cuarto elemento se refiere a esto último: quiebre, decadencia y descomposición del concepto de democracia y su significado histórico y político. Si la democracia significaba algo

en Occidente, en el Chile de 1973, estaba en discusión su contenido de fondo y sus aplicaciones prácticas. A ello se sumaba, como tema central, la pérdida de lealtad hacia la tradicional democracia chilena. Esto permitía generar en algunos actores la convicción, a medida que pasaba el tiempo, que una intervención militar —así estableciera una dictadura— tendría el valor de terminar con el régimen marxista en Chile (pensamiento de la derecha y de amplios sectores del mundo demócratacristiano). Como contraparte, otros pensaban que el camino hacia el socialismo era irreversible, aunque no existieran las mayorías democráticas para avanzar en esta dirección que, por lo demás, se estimaba terminaría en una dictadura del proletariado. Como se ve, el gran perdedor era la democracia, que parecía perdida, desaparecida o degradada incluso antes del 11 de septiembre¹⁶.

El quinto factor fue la irrupción de la violencia política fáctica, así como del riesgo repetido hasta la saciedad de que estallara una guerra civil en el país. En el gobierno de la UP, la violencia, las acciones terroristas y vías de hecho se convirtieron en un modo de hacer política que, en realidad, podía poner en riesgo a cualquier democracia que coexistiera con aquella realidad. A la larga, la tesis de que el enfrentamiento era inevitable comenzó a imponerse en sectores amplios de la izquierda y, desde luego, en aquellos amplios sectores de oposición que progresivamente esperaron o pidieron una intervención militar. A la larga el temor a la guerra civil sería muy relevante para la intervención militar, en la forma como se dio, más todavía considerando el gran temor de las Fuerzas Armadas a que se produjera una división dentro de ellas. Por su parte, aunque el golpe de Estado no fuera inevitable, es un hecho que las alternativas democráticas, pacíficas o institucionales al conflicto político fueron fracasando una tras otra.

Finalmente, podemos mencionar también una cuestión a la que no siempre se presta la atención que merece: me refiero a la viabilidad histórica de la vía chilena al socialismo ¿Era posible transitar al socialismo como lo proponía el programa de gobierno de la UP y como repitió el presidente Allende en aquellos años? Sergio Bitar, con buenos argumentos, ha señalado que la fórmula era viable, pero se fue tornando inviable. Sin embargo, si

¹⁶ Un estudio valioso y bien documentado sobre el concepto de democracia en aquellos años por D. Hurtado (2019).

recurrir al propio gobernante, nos encontramos con una contradicción entre la ideología y los hechos. A juicio de Allende —citando a Engels—, era posible pasar de la vieja sociedad a la nueva en aquellas sociedades en que la mayoría de la nación y del órgano representativo eran favorables a dicha opción. Y, luego, afirmaba: «Y este es nuestro Chile. Aquí se cumple, por fin, la anticipación de Engels» (Allende, 1970). Si bien Allende mostraba conocer bien a Engels, no se puede decir lo mismo de su análisis para el caso chileno: ni el 5 de noviembre, cuando pronunció tal discurso, ni en 1973 —por ejemplo, después de las elecciones de marzo— el gobierno pudo contar con una mayoría social o política que le permitiera construir el socialismo en Chile. Esto no tiene que ver con el mérito de la propuesta, con la pugna entre vía chilena y vía armada, con los errores del gobierno o las intransigencias de la oposición: tiene que ver, simplemente, con la realidad. Y, en la vida real, Allende y la UP no tuvieron mayoría social ni mayoría parlamentaria para avanzar al socialismo en pluralismo, democracia y libertad. Y esta contradicción, en el Chile de 1973, fue una de las causas de la crisis final.

Hemos dicho que el 11 de septiembre de 1973 no era inevitable, aunque me parece que se trata de una discusión ociosa, frente a la realidad de los hechos y el fracaso de las alternativas. Vale la pena citar una reflexión de Patricio Aylwin, que contiene en sí misma las grandes contradicciones que vivió Chile en aquellos años: «Sigo pensando, como entonces, que la democracia habría podido salvarse. Pero para ello era indispensable una importante dosis de racionalidad, que no existía» (Aylwin, 2023, p. 730). En otras palabras, no pudo salvarse, precisamente porque faltaba la condición indispensable fijada por el presidente del Partido de la Democracia Cristiana: la racionalidad.

Así, se acabó una de las democracias más prestigiosas y de larga duración, no sólo en América Latina, sino también en el hemisferio occidental.

Referencias

- Allende, S.** (1970). Primer Discurso después de Haber Asumido el Gobierno (5 de noviembre, 1970). En V. Farías, *La Izquierda Chilena (1969-1973)* (471-480). Centro de Estudios Públicos.
- Arancibia, P.** (2001). *Los Orígenes de la Violencia Política en Chile, 1960-1973*. Libertad y Desarrollo — CIDOC Universidad Finis Terrae.
- Ahumada, J.** (1966). *La Crisis Integral de Chile*. Editorial Universitaria.
- Altamirano, C.** (1977). *Dialéctica de una Derrota*. Siglo XXI Editores.
- Aylwin, P.** (2023). *La Experiencia Política de la Unidad Popular*. Debate.
- Bitar, S.** (2017). *El Gobierno de Allende. Chile 1970-1973*. Pehuén.
- Fernandois, J.** (2019). *La Revolución Inconclusa. La Izquierda Chilena y el Gobierno de la Unidad Popular*. Centro de Estudios Bicentenario.
- Casals, M.** (2023). *Contrarrevolución, Co-laboracionismo y Protesta. La Clase Media Chilena y la Dictadura Militar*. Fondo de Cultura Económica.
- Garay, C.** (2014). *Entre la Espada y la Pared. Allende y los Militares 1970-1973*. Centro de Estudios Bicentenario.
- Garcés, J.** (1990). *Allende y la Experiencia Chilena*. Ediciones BAT.
- Guevara, E.** (2006). Crear Dos, Tres... Muchos Vietnam Es la Consigna. En E. Guevara, *Obras Completas* (295-306). Editorial Solar.
- Harmer, T.** (2013). *Allende y la Guerra Fría Norteamericana*. Ediciones Universidad Diego Portales.
- Hurtado, D.** (2019). *Las Palabras No Se las Lleva el Viento. Lenguajes Políticos y Democracia durante el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)*. Centro de Estudios Bicentenario.
- Morales, F. J.** (2023). *Historia de la Violencia Política durante la Unidad Popular. Actores, Coyunturas, Discursos (1970-1973)*. Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile — Fondo de Cultura Económica — Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
- Pinto, A.** (1959). *Chile, un Caso de Desarrollo Frustrado*. Editorial Universitaria.
- Power, M.** (2003). Anti-Allende Women and the 1973 Military Coup in Chile. *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América*, 2 (2), 33-58.

- Power, M.** (2008). *La Mujer de Derecha. El Poder Femenino y la Lucha contra Salvador Allende 1964-1973*. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
- Prats, C.** (1985). *Testimonio de un Soldado*. Pehuén.
- Quiroga, P.** (2016). *La Dignidad de América. El Retorno Histórico a Salvador Allende*. Ediciones Escaparate.
- Rojas, G.** (2003). 11 de Septiembre de 1973. Los Militares Terminaron lo que los Civiles Comenzaron. *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América*, 2 (2), 85-96.
- Sáenz, O.** (2017). *Testigo Privilegiado*. Arcus.
- San Francisco, A., (director), Castro J. M., Cortés M., Duchens, M., Larios, G., y Soto, A.** (2018). *Historia de Chile 1960-2010. El Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970)*, t. III. Centro de Extensión y Estudios Universidad San Sebastián — CEUSS.
- San Francisco, A., (director), Castro J. M., Cortés M., Duchens, M., Larios, G., y Soto, A.** (2019). *Historia de Chile 1960-2010. Las Vías Chilenas al Socialismo. El Gobierno de Salvador Allende (1970-1973)*, I Parte, t. V. Centro de Extensión y Estudios Universidad San Sebastián — CEUSS.
- San Francisco, A., (director), Castro J. M., Cortés M., Duchens, M., Larios, G., y Soto, A.** (2019). *Historia de Chile 1960-2010. Las Vías Chilenas al Socialismo. El Gobierno de Salvador Allende (1970-1973)*, II Parte, t. VI. Centro de Extensión y Estudios Universidad San Sebastián — CEUSS.
- Sepúlveda, A.** (2020). *La Unidad Popular. Los Mil Días de Salvador Allende y la Vía Chilena al Socialismo*. Editorial Sudamericana.
- Touraine, A.** (2020). *Vida y Muerte del Chile Popular*. Editorial USACH.
- Valenzuela, A.** (2013). *El Quiebre de la Democracia en Chile*. Ediciones Universidad Diego Portales.
- Verdugo, P.** (2013). *Allende. Cómo la Casa Blanca Provocó su Muerte*. Catalonia.